



NUE 186-A-2019 (AC)

Martínez Rosales contra Dirección General de Centros Penales (DGCP)

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con treinta y dos minutos del diez de enero de dos mil veinte.

I. Descripción del caso:

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **Santos Ulises Martínez Rosales**, en adelante el apelante, en contra de la resolución emitida por la Oficial de Información de la **Dirección General de Centros Penales (DGCP)**, respecto de la siguiente información: "*copia de documento que expresa resultados de reunión entre el Director General de Centros Penales con Jueces de Vigilancia Penitenciaria*".

La Oficial de Información de la **DGCP** resolvió: que se entregue fotocopia del memorando SAJ-1289/20/9, de fecha 17 de julio del presente año [2019], emitido por Subdirección General de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Centros Penales, en la cual se señala que dicha subdirección jurídica no cuenta con la referida información, por lo que se recomienda que sea requerida a la *Dirección General de Centros Penales* (sic).

El Instituto admitió la apelación en resolución de fecha 02 de septiembre de 2019 y se designó al comisionado José Alirio Cornejo Najarro para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

Durante la etapa de instrucción, la **DGCP** rindió el informe de ley al que se refiere el Art. 88 de la LAIP, evacuado por el apoderado general judicial y administrativa del ente obligado, Hegri Yesadax Morales Velásquez, quien en lo medular ratificó el contenido de la resolución emitida por la oficial de información, en el sentido que la subdirección jurídica de la DGCP no cuenta con la información solicitada; además, estableció que la misma es inexistente, porque nunca se generó. Ofreciéndose como prueba documental: (a) copia simple de resolución UAIP/OIR/0227/2019, de fecha 20 de agosto de 2019; (b) Copia simple de



memorándum SAJ-1289/2019 con fecha 17 de julio de 2019, emitido por la subdirección jurídica.

Posteriormente, se realizó audiencia oral correspondiente, haciéndose constar que la parte apelante no compareció, pese haber sido debidamente notificado y citado para su realización. Respecto al ente obligado, en la referida audiencia se mostró parte el licenciado **Juan Carlos Fuentes Díaz**, en sustitución de Hegri Yesadax Morales Velásquez; quien no realizó ofrecimiento probatorio diferente al realizado en el informe justificativo. Sin embargo, dentro de sus alegatos manifestó que la reunión que se llevó a cabo con los jueces a finales del mes de junio de 2019, no se levantó acta de los resultados que había tenido dicha reunión. Que la finalidad de la misma, era propiciar un acercamiento del nuevo Director General de Centros Penales con dicha judicatura con la que tiene “una relación muy estrecha y constante”.

Además, afirmó que ello le consta, en virtud que en ese momento él ejercía el cargo de subdirector de asuntos jurídicos, cuando fue parte de la organización de dicha reunión. Que entre los temas que se discutieron fueron ordenes de libertad y protocolo para el registro de funcionarios que ingresan a los diferentes Centros Penitenciarios. A preguntas del comisionado Andrés Gregori Rodríguez, el licenciado **Fuentes Díaz** señaló que no se realizó ninguna minuta ni acta de dicha reunión. Seguidamente, a preguntas de la comisionada Silvia Cristina Pérez Sánchez, el citado profesional manifestó que no tiene registro de la fecha exacta de la reunión, pero recuerda que se realizó a finales del mes de junio de 2019, justo con el ingreso del nuevo Director General.

Por otra parte, advirtiendo el pleno de este Instituto, que el acta de audiencia oral adolece de error material en la consignación de su referencia, al identificarse como NUE 188-A-2019, siendo lo correcto NUE 186-A-2019, de conformidad a lo establecido en los arts. establecido en el art.102 de la LAIP y el 122 de la Ley de Procedimientos Administrativos es pertinente subsanar de oficio el referido error material.

2. Análisis del caso

Este Instituto advierte que el objeto de la presente apelación es pronunciarse sobre la entrega de la información requerida, valorado la naturaleza de la misma y verificando si

existe obligación legal para su generación. En este contexto, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) Naturaleza de la información solicitada en el caso de mérito; y, (II) Competencias y facultades legales de la Dirección General de Centros Penales; y (III) Aplicación de lo desarrollado al presente procedimiento. 2). 2

I. En reiterada jurisprudencia se ha establecido por este instituto que el Derecho de Acceso a la Información Pública, comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan *interés público*. Así, en la Ley de Acceso a la Información Pública, se conceptualiza la información pública, como aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades (art. 6 literal "c" de la LAIP). 2)

Ahora bien, es válido aclarar que durante el quehacer diario de la administración pública, en cumplimiento de sus funciones pueden existir diferentes actividades de las que no consten registro, pues sería difícil contar con una bitácora de todas y cada una de dichas actuaciones. Por lo cual, resulta relevante establecer en que casos los servidores públicos deben documentar por escrito sus actos, pues para garantizar el ejercicio de dicho derecho, es un requisito *sine qua non* que la información exista, haya sido generada, administrada, se encuentre en poder del ente obligado, al que ha sido solicitado o que exista un mandato normativo para generarla; en caso contrario podría estarse frente al derecho constitucional de petición y respuesta (art. 18 Cn.).

Bajo este contexto, al no constar la existencia de documento que expresen los resultados de la reunión entre el Director General de Centros Penales con Jueces de Vigilancia Penitenciaria -pues no se aportó prueba respecto de su existencia-, corresponde verificar si para el caso existe mandato normativo que ordene la generación de la misma, valorando que el apoderado del DGCP, confirmó su realización a finales del mes de junio de 2019.

II. Debe advertirse que, por mandato constitucional, los funcionarios de gobierno son delegados del pueblo, y no tienen más facultades que las que expresamente les da la Ley (art. 86 Cn) al contenido de esta normativa, se le denomina doctrinariamente "principio de



legalidad positivo”, el cual implica que el actuar de todo funcionario o empleado público está sujeto y delimitado por la norma secundaria, en virtud que su actuar lo realiza bajo la investidura de la administración pública.

Por lo cual, al realizar el análisis del caso, debe corroborarse las funciones y atribuciones otorgadas por ley a la Dirección General de Centros y en particular a su titular:

Es así que la Ley Penitenciaria (L.P.)¹, regula la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad previstas en el Código Penal y las penas contempladas en las demás leyes especiales; asimismo, la aplicación de la detención provisional, se instituye los organismos de aplicación de la ley (Art. 18 L.P.), entre los cuales se encuentran la Dirección General de Centros Penales, el Consejo Criminológico Nacional, los Consejos Criminológicos Regionales, los Equipos Técnicos Criminológicos y la Escuela Penitenciaria.

El artículo 20 de la referida normativa, regula que la Dirección General de Centros Penales estará a cargo de un Director General y dentro las funciones del mismo, se encuentra garantizar *el cumplimiento de la ley y su reglamento* (art. 21 numeral 1 L.P.), lo cual es conforme al principio de legalidad positivo, pues sus atribuciones son dadas por el legislador.

Entonces, al existir mandato legal de verificar el cumplimiento del Reglamento General de la Ley Penitenciaria (R. G. L. P.)², es válido corroborar su contenido, pues su cumplimiento es parte de sus obligaciones. En tal sentido, el art. 36 del R. G. L. P. establece como obligación de la Secretaría General la elaboración de actas, notas y oficios de reuniones, gestiones, y otras actividades que desarrolle la Dirección General.

Es decir, que de las reuniones realizadas por la Dirección General de Centros Penales, debe existir constancia por escrito, estando obligada la Secretaría General de cumplir con tal atribución y por su parte el Director General debe velar por el acatamiento de ese deber. Es decir, en el marco de las disposiciones legales precitadas consta que se cuenta con normativa

¹ Decreto Legislativo 1027, de fecha 30 de abril de 1997, publicado en diario oficial número 85, tomo 335, de fecha 13 de mayo de 1997.

² Decreto Ejecutivo 95, de fecha 14 de noviembre de 2000, publicado en diario oficial número 215, tomo 349, de fecha 16 de noviembre de 2000.

que obliga la gestación de actas que respalde el contenido de las reuniones que sostenga la Dirección General de ese ente obligado. D.C.

III. En el caso en análisis, corresponde hacer la valoración probatoria, de acuerdo a los elementos de la sana crítica, es así, que el apoderado del ente obligado, ofreció copia simple de resolución UAIP/OIR/0227/2019 de fecha 20 de agosto de 2019 y copia simple de memorándum SAJ-1289/2019 con fecha 17 de julio de 2019, emitido por la subdirección jurídica de la Dirección General de Centros Penales; sin embargo, dichos documentos no cumplen los requisitos de un documento público y tampoco se presentaron según lo establecido en el art. 30 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras diligencias, por lo cual, no cuenta con elementos para establecer la veracidad de su contenido, no obstante, la valoración probatoria se realiza conforme a las reglas de la sana crítica (art. 90 LAIP), la documentación presentada, para ser incorporada a este procedimiento, debe cumplir con los requisitos de ley para su valoración; por lo tanto, en base a los Arts. 318, 319 y 320 del Código Procesal Civil y Mercantil, se debe tener por rechazados los documentos presentados. JH

No obstante lo anterior, habiéndose remitido el expediente administrativo correspondiente al presente caso, el cual se encuentra revestido de legitimidad, al constituirse como documento público, de conformidad a lo establecido en los arts. 3 letra "a" y 102 de la LAIP, en relación a los art. 3 numeral 8 de la ley de Procedimientos Administrativos (LPA), corresponde verificar su contenido, a efecto darle el valor probatorio correspondiente.

A folios 5 del expediente con referencia UAIP/ OIR/0227/2019, corre agregado memorándum de fecha 12 de julio de 2019, suscrito por la oficial de información de la Dirección de Centros Penales, dirigido a la Unidad de Asuntos jurídicos de esa instrucción, por medio del cual se le informa la solicitud de información realizada en el presente caso, a efecto de que se le dé trámite a la misma. Posteriormente, en fecha 17 de julio del año recién pasado, se emitió respuesta por la referida Unidad de Asuntos jurídicos, en la cual señala que dicha información no se encuentra en dicha unidad por lo que se requiere que se solicite la misma a la "Dirección General de Centros Penales ya que es el área correspondiente".



Seguidamente, en el ejercicio de sus funciones, la oficial de información, emitió oficio dirigido al Director General de Centros Penales, Osiris Luna Meza, de fecha 29 de julio de 2019, constando fecha de recibido el 30 de julio del mismo año, por medio del cual se solicitaba la información requerida por el ahora apelante; sin embargo, no consta respuesta al mismo, incluso a folio posterior consta resolución por medio del cual se ordena la prórroga del plazo para la entrega de dicha información, y con fecha 20 de agosto de 2019 (es decir veinte días posteriores a la remisión del oficio a la Dirección General de Centros Penales), se emitió resolución en la que se ordena entregar al ciudadano requirente, copia del memorándum emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos.

Con dicha prueba se tiene por establecido, que existe indicación jurídica por parte del mismo ente obligado, que establece que la información pública solicitada debe estar en custodia de la Dirección General, y a pesar de habersele trasladado la petición a la misma, no consta respuesta, en cuanto a las acciones positivas realizadas para su localización, no obstante haber obligación legal de contar con la misma.

Ahora bien, doctrinariamente los hechos admitidos, no requieren ser probados, y en el presente caso, el apoderado de la Dirección General de Centros Penales, en audiencia oral, afirmó la existencia de la reunión celebrada entre el Director de dicha institución y Jueces de Vigilancia Penitenciara, a finales de junio de 2019, hechos que le constan, por ejercer en ese momento el cargo de subdirector de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

Entonces, se tiene plenamente probada la existencia de tal reunión, y que existe obligación por parte del Director General de Centros Penales, de verificar que la secretaria de la referida institución, elabore el acta, documento o nota, respecto a los resultados de la misma, según normativa desarrollada en el romano II de esta resolución, lo cual es respaldado por la indicación jurídica emitida en fecha 17 de julio de 2019, en consecuencia, es pertinente revocar la resolución emitida por la oficial de información en fecha 20 de agosto del año recién pasado, ordenando nueva búsqueda y en caso de no contar con dicha información se deberá generar la misma, colocando la fecha exacta, los hechos que acontecieron y firmada al menos por el Director General y el entonces subdirector jurídico.

Finalmente, debe reiterarse que existe una correlación del Estado y los demás entes obligados de garantizar la entrega oportuna, veraz, completa y fidedigna de la información pública o, en caso contrario, fundamentar la imposibilidad de acceso con base en una causa prevista por la ley y compatible con la Constitución; de ahí que el acceso a la información pública tiene por objeto la transparencia constante de los actos de gobierno; es decir, que la población se entere, sepa de qué se trata, tome noticia de los antecedentes, de los fundamentos y de todo lo atinente a una decisión³. Por cuanto, los actos realizados por el Director General de Centros Penales, en cuanto sean de interés público y en el ejercicio de sus funciones, constituyen información pública, y particularmente, en el caso de reuniones oficializadas por el mismo, habiendo obligación legal para la generación del soporte o documento correspondiente, de su resultado, a fin de generar transparencia en las funciones que realiza.

3. Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los Arts. 6 y 18 de la Cn., 48, 94, 96 letra “d” y 102 de la LAIP, este Instituto, **resuelve:**

a) Revocar la resolución de la oficial de información de la **Dirección General de Centros Penales (DGCP)**, de fecha 20 de agosto de 2019, respecto a la petición relacionada *a copia de documento que expresa resultados de reunión entre el Director General de Centros Penales con Jueces de Vigilancia Penitenciaria*”

b) Ordenar a la **Dirección General de Centros Penales** que, a través de su titular, en el plazo de **cinco días hábiles** contados a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, realice nueva búsqueda de la información requerida en el presente caso, en particular en la Secretaría General de dicha institución, y en caso de no contar con el soporte correspondiente del resultado de la misma, se ordena la generación de la misma, de conformidad a lo establecido en el art. 21 numeral 1 L.P., en relación al art. 36 del R. G. L. P., en el conste la fecha exacta y los hechos acontecidos, firmada al menos por el Director de Centros Penales y el entonces Subdirector Jurídico. Vencido el plazo anterior, deberá

³ Resolución final dentro del expediente con referencia NUE 22-A-013, emitida con fecha 09 de septiembre de 2013



entregar en el plazo de veinticuatro horas, la información al señor **Santos Ulises Martínez Rosales**, por el medio indicado en su solicitud de información.

c) **Ordenar** a la **Dirección General de Centros Penales** que dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento de los plazos anteriores, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en la letra b) de esta parte resolutive, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

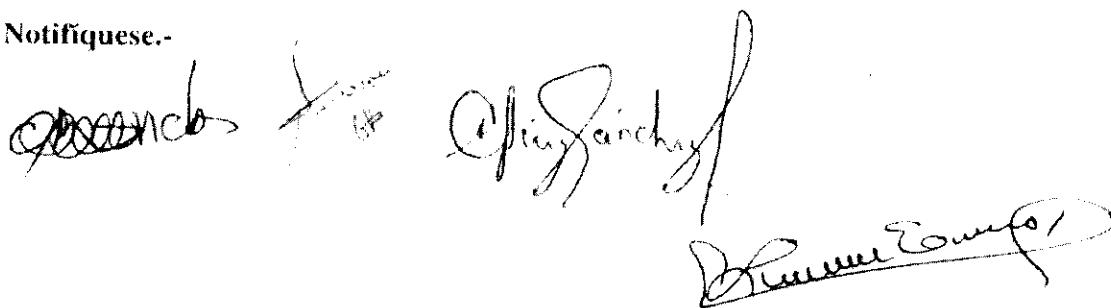
d) **Corregir** el error material advertido en el acta de audiencia oral, de fecha 26 de noviembre de 2019.

e) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

f) **Remitir** el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

g) **Publíquese** esta resolución, oportunamente.

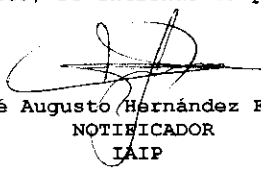
Notifíquese.-



PRONUNCIADO POR LAS COMISIONADAS Y EL COMISIONADO QUE LA SUSCRIBEN.

sd cc

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil veinte.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP



